

La Cumbre Social de los Pueblos de Lima Enlazando Alternativas III:

Una evaluación de las resistencias sociales biregionales contra el neoliberalismo global, los Tratados de Libre Comercio y las transnacionales europeas en el continente latinoamericano.

Por Magali Thill, Directora Adjunta de ACSUR-LAS SEGOVIAS

Los días 13 a 16 de mayo, se celebró en paralelo a la Cumbre de Jefes de Estados y de Gobiernos de la Unión Europea (UE) y de América Latina y Caribe (ALC) de Lima, la 3era Cumbre Social de Los Pueblos "Enlazando Alternativas III", en la que participaron unas 300 organizaciones campesinas, indígenas, feministas, sindicatos, redes de la sociedad civil, partidos de izquierdas, colectivos afectados por las actividades de las transnacionales, y organizaciones internacionalistas comprometidas con la transformación hacia un modelo de sociedad diferente en la que tuvieran cabida en condiciones de igualdad, los pueblos y comunidades marginadas, colonizadas y oprimidas. Durante estos días, unas 8000 personas acudieron a la Universidad de Ingeniería de Lima para participar en los 100 talleres autogestionados, 6 plenarios temáticos, la Cumbre indígena, la Carpa de mujeres y las sesiones del prestigioso Tribunal Permanente de los Pueblos.

A la hora de valorar el éxito de esta III Cumbre de los Pueblos, es importante tener en cuenta que se fue gestando en un contexto socioeconómico conmocionado por la crisis financiera, energética y alimentaria en la que están inmersos la mayoría de los países de América Latina y de Europa. De forma concomitante, podemos afirmar que el clima sociopolítico regional que rodeó los preparativos de la Cumbre de Lima estaba más polarizado que durante los meses anteriores a la Cumbre UE-ALC de Viena en 2006. A nivel birregional, sólo falta recordar que en octubre del año pasado, la Cumbre iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno había sido el escenario de un enfrentamiento entre la delegación del gobierno español y varios jefes y jefas de Estado de América Latina, que en una legítima reivindicación de soberanía nacional, habían reprochado al Ministro de Asuntos Exteriores, las presiones ejercidas por sus embajadas para la concesión de contratos, desregulación de mercados y otorgamiento de ventajas, beneficios y garantías a las transnacionales españolas.

El proceso de negociación para la firma de Acuerdos de Asociación (AdAs) entre la UE y la Comunidad Andina de Naciones (CAN) tampoco daba muestras de estar en su mejor momento. Después de las tres primeras rondas, se hizo evidente que Evo Morales y Rafael Correa no darían su brazo a torcer, barajándose la posibilidad de que la UE adoptara velocidades distintas con los países de la región andina, lo cuál amenaza con abrir una brecha en la integración de la región andina. También venían cobrando voz los movimientos populares, campesinos e indígenas opuestos a la negociación de similares acuerdos con Centroamérica (CA), en un contexto regional en el que ningún gobierno parece atreverse a cuestionar los tratados de libre comercio de la UE.

Pero el nudo gordiano de la polarización política en la región articulado entorno al pulso de Uribe contra Chávez y Correa alcanzó su paroxismo cuando la aviación colombiana lanzó en territorio ecuatoriano una operación militar en la que fue brutalmente asesinado al dirigente de las FARC Raúl Reyes. El ordenador supuestamente hallado en el campamento donde se había realizado el ataque, iba a revelar unos "secretos" que servirían mejor que ningún otro alijo, los intereses propagandísticos de los gobiernos de Perú y Colombia contra los partidos comunistas y bolivarianos de América Latina, dándoles además argumentos para criminalizar las protestas sociales cada vez más frecuentes en un contexto regional marcado por el descontento popular ante el incremento de la pobreza, la

desigualdad, la explotación laboral, la subida de los precios de los alimentos, la concentración de la tierra, la contaminación del medioambiente y la militarización.

El domingo 11 de mayo, dos días antes del inicio de la Cumbre Social de los Pueblos, el periódico El País publicó un artículo bastante contestado por los movimientos sociales de América Latina, en el que Maite Rico no dudó en declarar que las FARC tenían junto con "otros grupos de República Dominicana, Nicaragua, Ecuador, Bolivia y Venezuela", una red regional de guerrillas armadas y entrenadas, listas para actuar. Esta "noticia" daba a entender que 3 de los jefes de Estado – Ecuador, Bolivia, Venezuela- invitados por Enlazando Alternativas a participar junto a representantes de los movimientos sociales de ambas regiones en el acto final de la Cumbre de los Pueblos de Lima, estarían dando amparo a estos "combatientes internacionalistas".

En el ámbito peruano, donde la represión sigue siendo práctica cotidiana del régimen de Alan García, las tensiones se tradujeron en campañas de persecución, intimidación y demonización de los movimientos sociales en general, y de los organizadores de la Cumbre de los Pueblos en especial. Hasta tal punto que dos semanas antes del inicio del evento, aún no se había conseguido la autorización de utilizar ningún edificio público a este efecto en Lima. Durante la Cumbre, el Presidente García hizo alarde de un despliegue militar permanente en todos los lugares claves del encuentro: entorno a la Universidad de Ingeniería (UNI) donde se consiguió finalmente acoger los eventos de Enlazando Alternativas III, a las afueras de los hoteles donde se alojaban los participantes internacionales y en las bocacalles de acceso a la Plaza Dos de Mayo donde se realizó al acto de clausura la tarde del 16 de mayo.

A pesar de esta polarización sociopolítica y de la tensión que casi podíamos palpar en el aire húmedo, caliente y contaminado de Lima, la Cumbre de los Pueblos se desarrolló sin incidente, exceptuando quizás la anecdótica ruptura de una puerta de acceso a la UNI ante la presión de unos grupos afanosos de asistir al partido de football en el que jugaba Evo Morales. La Carpa de mujeres, el Foro de Radios, el Tribunal Permanente de los Pueblos, y los cientos de organizaciones que participaron en los talleres y plenarios programados, llevaron a cabo la tarea que se habían fijado, la de avanzar en la elaboración de estrategias birregionales de denuncia y resistencia contra el sistema neoliberal global, y de construcción de alternativas sociales, políticas y económicas para un mundo más justo y sostenible.

Mientras el presidente boliviano Evo Morales denunciaba desde el barrio de Miraflores donde se celebraba la Cumbre oficial, que el comisario europeo de comercio Peter Mandelson había amenazado con dejar fuera de la negociación a los países que se resistirían a ingresar en un "Tratado de Libre Comercio" con la UE, un tratado que calificó de "instrumento de colonización y dominio", los movimientos sociales de ambas regiones "rechazaban el proyecto de Acuerdos de Asociación propuesto por la Unión Europea y avalado por diversos gobiernos latinoamericanos y caribeños que sólo buscan profundizar y perpetuar el actual sistema de dominación que tanto daño a hecho a nuestros pueblos", como lo expresaron en la Declaración final de la Cumbre Enlazando Alternativas III.

En este mismo documento, se desenmascaró la "estrategia de la Unión Europea *Europa Global: Competir en el mundo*", porque "supone la profundización de las políticas de competitividad y crecimiento económico que buscan implementar la agenda de sus transnacionales y profundizar las políticas neoliberales, incompatibles con el discurso sobre el cambio climático, la reducción de la pobreza y la cohesión social", habiendo sido éstos los supuestos objetivos declarados de la V Cumbre birregional de Jefes de Estado y de Gobierno de la UE y ALC. A ninguno de

los líderes y lideresas comunitarios, indígenas, sindicales y mineros de la región andina que participaron en la Cumbre de los Pueblos, les podía engañar esta demagogia, porque les quedó evidente que el verdadero acerbo de este encuentro gubernamental residía en la obtención de compromisos más firmes por parte de los gobiernos latinoamericanos y caribeños hacia una mayor apertura de sus mercados, el avance de los intereses empresariales europeos y el control de los movimientos migratorios provenientes del continente latinoamericano, de la misma manera que el discurso sobre cooperación y diálogo político de los Acuerdos de Asociación, no logra esconder que el incentivo es la pronta firma de unos TLC que revertirán en beneficio de las transnacionales europeas. Como lo señala la Cumbre de los Pueblos, "a pesar de que se pretende velar su naturaleza incorporando temas de cooperación y diálogo político, la esencia de la propuesta es abrir los mercados de capitales, bienes y servicios, proteger la inversión extranjera y reducir la capacidad del Estado de promover el desarrollo económico y social".

Uno de los casos más emblemáticos de resistencia gubernamental contra la tiranía de la globalización neoliberal, ampliamente documentado y respaldado por los movimientos sociales reunidos en la Cumbre de los Pueblos, ha sido la decisión del gobierno de Evo Morales de retirarse del CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Este organismo de conciliación y arbitraje de carácter supranacional con sede en Washington y dependiente del Banco Mundial, es una instancia privada que dirime las disputas entre los estados y las empresas transnacionales. Situado por encima del derecho público nacional e internacional, el CIADI se ha convertido a los ojos de la izquierda latinoamericana en el ejemplo más claro de cómo la arquitectura internacional supedita la soberanía nacional de los estados a los intereses transnacionales del Capital, porque blinda los privilegios de las transnacionales e intereses de los inversionistas que los tratados bilaterales de inversiones (TBI) establecen mediante una panoplia de condiciones atractivas para la Inversión Extranjera Directa. Además del "trato nacional" y la "cláusula de nación más favorecida", estos TBI incluyen una serie de protecciones y garantías contra las demandas de nacionalización o expropiación de empresas privadas -entendiéndose por expropiación también la reducción significativa del valor de una inversión extranjera-, exigiendo el cumplimiento de las siguientes condiciones: por razones de utilidad pública, sobre una base no discriminatoria, bajo el debido proceso legal y pagando una compensación juzgada aceptable por la transnacional. Aún cuando sus actividades constituyen claras violaciones de los derechos de las comunidades donde están implantadas, las transnacionales se amparan en estos limitantes, para denunciar ante el CIADI cualquier intento estatal de recuperación de una parte de mercado, un contrato de explotación o una cuota de servicios públicos, pero también cuando un Estado decide legislar un sector de una manera que una transnacional considere dañina para sus intereses, como puede ser mediante la adopción de una norma medioambiental, una ley de protección de los derechos sindicales o una respuesta económica ante una crisis financiera como la que afectó Argentina.

El artista Jota Castro, autor de la Hucha de oro de 80 kilos "Por favor, devuelvan el oro de los incas" que "desapareció" de la exposición callejera "Madrid Abierto 2008" el pasado mes de febrero, se hizo también el eco de las demandas de los pueblos de Perú, la región andina y todo el continente latinoamericano a una clase política que les hace el oído sordo. En una *performance* callejera titulada "la palabra de los mudos" en la que varios centenares de personas usaron de forma crítica el lenguaje sordomudo, el artista se exclamó: "No nos escuchan, no escuchan lo que somos, porque hoy en día en el que todo el mundo habla de comunicación, no nos escuchan (...). Hoy aquí en nuestra ciudad, se habla de lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión. ¿No prefieren que les digamos la verdad? ¿O preferirían soñar, que yo les diga que de aquí a Berlín, que de aquí a Beijín, somos todos iguales? ¿No prefieren la verdad?, ¿no prefieren que empecemos a decir la verdad

de una vez en este puto país?, ¿Dónde está la justicia que todo el mundo pide, donde está la justicia que todo el mundo dice conocer?”.

Como millones de personas que sufren las consecuencias de las políticas neoliberales, también pidió justicia el Tribunal Permanente de los Pueblos, reunido en Lima para celebrar su sesión sobre Políticas neoliberales y transnacionales europeas en América Latina y Caribe. “Creado en 1979 para suceder a los Tribunales Russell sobre Vietnam (1966-1967) y sobre las dictaduras de América Latina (1974-1976), el TPP tiene por vocación y Estatuto el cometido de dar visibilidad y calificar en términos de derecho todas aquellas situaciones en las que la violación masiva de los derechos fundamentales de la humanidad no encuentra reconocimiento ni respuestas institucionales, sea en el ámbito nacional o internacional”. Presidido por el Profesor François Houtard, el TPP “sancionó moral y éticamente las conductas y prácticas políticas, económicas, financieras, productivas y judiciales del modelo neoliberal, implementadas y permitidas por los Estados y las instituciones de la Unión Europea, bajo la argucia de promover el crecimiento y desarrollo económico para combatir la pobreza y lograr el desarrollo sostenible”. Encausó simbólicamente a más de 21 empresas transnacionales europeas, pertenecientes a 12 sectores de actividad por violaciones a los derechos humanos, sociales, sindicales y medioambientales de los pueblos de ALC (minería: MONTERRICO METALS, petróleo: REPSOL y SHELL, forestal-maderero: BOTNIA, farmacéutico: ROCHE, telecomunicaciones: TELECOM ITALIA, Agroalimentación y exportaciones no tradicionales: CAMPOSOL, CERMAC MAINSTREAM, MARINE HARVESTS, UNILEVER, infraestructura y siderurgia: THYSSEN KRUPP y SKANSKA, electricidad: SUEZ y UNION FENOSA, aguas; AGUAS DE BARCELONA, PROACTIVA, agroquímicos: BAYER y SHELL, banca: BBVA, SANTANDER, HSBC, semillas transgénicas; SYNGENTA).

Con el fin de efectivizar las denuncias de los colectivos afectados por los abusos de las transnacionales, y lograr combatir la impunidad con la que éstas operan, el TPP vio la necesidad de profundizar en el campo del ordenamiento jurídico internacional, pidiendo “al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que designe un Relator Especial para que con la mayor brevedad, presente un informe a la Asamblea General que contenga la propuesta de acuñar el concepto de deuda ilegítima, ecológica e histórica, así como la calificación de las violaciones de derechos económicos, sociales y culturales en contra de las personas y de los pueblos, por parte de gobiernos, instituciones financieras y corporaciones multinacionales, debiendo a ese efecto constituirse un Tribunal Internacional para el juzgamiento de los crímenes económicos y ambientales, ante el cual las víctimas individuales o colectivas puedan acudir y constituirse en parte accionante legítima”.

Estos logros no nos tienen que hacer olvidar que mientras miles de personas aglomeradas en el Coliseo de la UNI escuchaban cómo el Tribunal reconocía “la importancia, la dificultad y los riesgos inherentes asociados a las luchas de los movimientos sociales, campesinos, de trabajadores e indígenas y otras organizaciones de base”, en el Museo de Arte de Lima ubicado en el centro de la Ciudad, se reunía la II Cumbre empresarial UE - ALC, auspiciada por las transnacionales españolas Telefónica y el BBVA, y convocada con el fin declarado de “involucrar activamente a los sectores empresariales en esos esfuerzos para el impulso de la Asociación estratégica birregional”. Algunos directivos que tendrían que haberse sentado en el banquillo del TPP, participaron en esta cumbre empresarial junto a representantes políticos como Alan García, Ángela Merkel, la comisaria europea Benita Ferrero-Walder y el Secretario General iberoamericano Enrique Iglesias. Esta cumbre hizo una vez más la apología de las alianzas público-privadas en la búsqueda de presuntas soluciones a los problemas de la pobreza, el cambio climático y la desigualdad, cosiendo con hilo verde los espejuelos de la responsabilidad social corporativa (RSC) sobre la tela de las relaciones biregionales

entre la Unión Europea y América Latina y Caribe¹. Pero lejos de dejarnos engañar por las campañas de lavado de imagen de las transnacionales que neo-colonizan el continente latinoamericano, no podemos dejar de anteponerles las palabras pronunciadas por el Presidente Evo Morales en el acto de clausura de Enlazando Alternativas III: "He aprendido que la política tiene que ser la ciencia de servir al pueblo, no de servirse del pueblo". A buen entendedor...

Magali THILL, directora adjunta de ACSUR Las Segovias. Junio 2008.

¹ El título de una de las intervenciones "Mercado de carbono: ventana de oportunidad" nos da la medida del compromiso empresarial por luchar contra el cambio climático, según una fórmula sencilla pero muy rentable de compra-venta de derechos a contaminar el planeta